

la oposicion en reconocer como legales los actos de los siete diputados reunidos en congreso; y que por lo mismo con el veredicto de la legislatura declarando haber lugar á la formacion de causa contra el Sr. Zepeda por el delito de rebellion, se ha vulnerado la garantía que contiene el art. 14 constitucional en la parte que previene, que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes exactamente aplicables al caso.

Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 22 de Agosto del año pasado por el Juez de Distrito de Nuevo Leon, á cuyo conocimiento pasó este negocio por las diversas escusas y recusaciones de los jueces propietario y suplentes de Coahuila, y que declaró:

Primero. Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Victoriano Zepeda, contra los actos de la legislatura de Coahuila, por los que lo sujetó á juicio como gobernador constitucional, declarando que era culpable por varios delitos oficiales.

Segundo. Que la misma justicia federal ampara y protege al expresado Sr. Zepeda contra los actos de la legislatura por los que lo sometió á juicio, diciendo por su veredicto que habia lugar á formacion de causa por el delito de rebellion.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*L. Velazquez.*

TOMO VII.—PARTE II.

—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

El que suscribe certifica: Que los ciudadanos Magistrados Juan J. de la Garza y Manuel de Castañeda y Nájera asistieron á la votacion del presente negocio; pero no lo firmaron, porque, en esta fecha en que se pone en limpio la anterior sentencia, ya no existen, pues el primero salió para Guatemala, y el segundo murió en Agosto del año pasado.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 28 de 1875.—*Enrique Landa*, secretario.

## AMPARO.

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Juan Francisco Arriola, contra el acto del tesorero de aquel Estado, que ejecutivamente le exige el pago de doscientos veintidos pesos de alcabálas por la introduccion de veinticinco tercios de cacao.*

SENTENCIA DEL C. JUEZ DE DISTRITO.

Puebla, 4 de Noviembre de 1874.—Visto el oculto presentado por el C. Juan Francisco Arriola, en que solicita el amparo de la Justicia federal contra la providencia ejecutiva dictada por el ciudadano que funge de Tesorero del Estado, por la que se le exige el pago de derechos, importantes 222 pesos, por introduccion á esta plaza de 25 tercios de cacao, fundando el recurso, en que el procedimiento en cuya virtud se ha embargado ese efecto, viola la garantía otorgada en el art. 16 de la Constitucion general, violacion que el quejoso deduce de varios capitulos, y son:

1º: No existir actualmente en el Estado leyes ó disposiciones que legalmente esta-

blezcan ó determinen el pago de contribuciones ó impuestos, dado el hecho de que no se ha expedido el presupuesto de ingresos, en el tiempo y forma prescritos en la frac. IX del art. 36 de la Constitución, adoptada el 14 de Setiembre de 1861, según la cual, no solo debe aprobarse por el Congreso el presupuesto anual de gastos, decretando las contribuciones necesarias para cubrirlo, sino que en la creación y recaudación de impuestos que formen la hacienda pública, deben intervenir los ayuntamientos, como lo ordena la frac. II del art. 79 de la misma Constitución:

2º No haber en el Estado *autoridad competente* para establecer impuestos, porque el poder legislativo, único á quien compete esa facultad constitucional, no existe en el Estado desde 1871, pues las reuniones periódicas que actualmente se conocen con los nombres de Congreso y Senado, carecen de legitimidad, y por lo mismo, no tiene la competencia de origen á que se refiere el expresado art. 16, para que puedan ejercer funciones legislativas, supuesto que ambas cámaras deben su existencia á las reformas introducidas á la Constitución local, las que, en sentir del promovente, son ilegales, por cuanto no se observan los requisitos marcados en el art. 118 de la misma Constitución de 1861:

3º Carencia de título legal de parte del tesorero, en razón de que el nombramiento por el cual funciona, sobre no haberse hecho de la manera prevenida en el art. 93 de la Constitución referida, se confirió por *autoridad ilegítima*, puesto que el C. Ignacio Romero Vargas no es Gobernador constitucional del Estado, por haber sido reelecto, contra lo expresamente prevenido en el art. 56 de esa misma Constitución:

4º Inconstitucionalidad del cobro de los derechos, porque teniendo éstos el carácter de alcabalas, es contrario á la prevención contenida en el art. 124 de la carta fundamental de la República:

Vistos igualmente los informes produci-

dos por el funcionario responsable, (fracs. 5 y 17) contradiciendo el recurso, en los que, después de asentar que en el Estado no rige ninguna Constitución nueva, sino la antigua de 1861, manifiesta: que no se ha violado por su parte, la garantía constitucional á que alude el promovente, porque el hecho de que no exista presupuesto de ingresos, no puede servir de precedente para inferir que se tengan por derogadas las leyes relativas á impuestos, contribuciones y derechos; porque además, la legalidad de la Constitución reformada se funda en el título XVIII, art. 118 de la antigua; porque conforme á ese artículo se hicieron las reformas sancionadas el 31 de Octubre y 12 de Diciembre de 1870; porque en la Constitución reformada estriba la legitimidad de la Asamblea, compuesta de dos cámaras; la del gobernador, que ha podido ser reelecto, y la del secretario de gobierno, de cuya legitimidad, según el mismo informe, viene la de su nombramiento de tesorero, con cuyo carácter puede recaudar impuestos, y expedir mandamientos de embargo, en cuyo caso proceden estos de autoridad competente; sosteniendo también, que no es exacto ni lógico deducir del tenor del artículo constitucional (36), que anualmente deba decretarse el presupuesto de ingresos; que el C. Ignacio Romero Vargas ha podido ser reelecto, pues la prohibición que contiene el art. 56, *fué suprimida* en la reforma de 12 de Diciembre de 1870; que no hay ley que reglamente la intervención de los ayuntamientos en la recaudación de los impuestos, y por último, que no es ilegal el cobro de alcabalas:

Vistas también las pruebas producidas, tanto por parte del promovente, como del ciudadano promotor, entre las que se encuentran las copias de los expedientes y decretos relativos á las reformas del art. 118 de la Constitución, y á las que se practicaron con posterioridad, y finalmente de las protestas que contra ellas formularon los ayuntamientos; cuyas copias, remi-

.....~~limitación de ambos interesados por~~ ~~los derechos del hombre, y los que miran á la~~  
 erno representativo popu-

o esto, la soberanía de los  
 ntitaciones generales, segun  
 puede estenderse mas allá  
 iere á su régimen interior,  
 toca á ese régimen está  
 s principios de la Constitu-

as limitaciones impuestas á  
 los Estados, existe aquella  
 a á impedirles que violen  
 dividuales, como existe tam-  
 ne por objeto asegurar la  
 a del pueblo de los mismos

rechos del hombre, y todo  
 ra á lo esencial de la forma  
 on antes que todo, y ordad  
 ng sostuvo en el Congreso  
 le los Estados Unidos, decla-  
*sacrificaría la libertad, la*  
*ciudadano, al fantasma de*  
*cal:*"

cuestiones promovidas en el  
 pare, casi ninguna mira al  
 miento interior del Estado en  
 ministrativa, sino que se rela-  
 mente con importantes pres-  
 la Constitución general, pues  
 se apoya en la violación de  
 rantías individuales (art. 16);  
 nien, en la ilegalidad del cobro  
 (art. 124), y se basa en fin,  
 n del art. 41, en el hecho de  
 á los poderes locales la ilegiti-  
 carácter, y el falsamiento  
 ución particular, en sus pre-  
 apitales, emanados de los es-  
 la carta fundamental del país,  
*la justicia federal debe tomar*  
*de esas cuestiones, para hacer*  
*derechos asegurados al pueblo*  
*los, por esa ley fundamental,*  
*iprema:*"

el gobierno del Estado y por la Asamblea,  
 no se cotejaron, á pesar de lo prevenido  
 por este juzgado, por la injustificable resis-  
 tencia del mismo gobierno, constante en  
 autos, y por el menosprecio con que la ex-  
 presada Asamblea ha visto el precepto de  
 la ley de 20 de Enero de 1869, puesto que  
 hasta hoy no contesta la última comunica-  
 cion que se le dirigió desde el 16 del mes  
 anterior, sobre si consentia ó no en que se  
 practicase el cotejo, razon por la que los  
 interesados, en obsequio de la brevedad, y  
 por creer suficientes sus justificaciones, de-  
 sistieron de su primitivo propósito: vistos,  
 en fin, los alegatos presentados en oportu-  
 nidad, con todo lo mas que consta de autos  
 y ha debido tenerse presente.

Considerando: que para la firmeza de la  
 resolucion que demandan las diversas cues-  
 tiones que abraza el recurso de amparo in-  
 terpuesto, se hace preciso fijar previamente  
 la competencia de este juzgado para exa-  
 minarlas y decidir las, ya que tanto el go-  
 bierno, como el tesorero, segun constancias,  
 al dejar á salvo los derechos y soberanía  
 del Estado, afectan creer ser extaño á la  
 jurisdiccion judicial federal, el conocimien-  
 to de esas cuestiones:

Que en órden á esto hay que tener pre-  
 sente ante todo, que la soberanía de los  
 Estados no es tan absoluta, que sean cua-  
 les fueren las cuestiones que se susciten  
 entre el poder y los gobernados, aun cuando  
 afecten leyes federales, y especialmente la  
 fundamental del país, pueden resolverse  
 por las autoridades locales, pues esto pug-  
 na abiertamente con los preceptos que en-  
 traña el art. 101 de esa misma ley, y con  
 la reglamentaria de ese artículo, expedida  
 en 1869:

Que ademas, entre los principios contē-  
 nidos en las constituciones particulares de  
 los Estados, hay unos que se derivan y de-  
 sarrollan en las mismas, y otros que ema-  
 nan de la Constitución federal, siéndolo  
 entre otros, aquellos que garantizan los de-

esencia del gol-  
 lar:

Que aparte  
 Estados tiene l  
 las que, ella n  
 de lo que se r  
 y aun en lo qu  
 circuncrita á l  
 cion general:

Que "entre  
 la soberanía d  
 que se encami  
 las garantías i  
 bien la que ti  
 libertad políti  
 Estados:"

Que los d  
 aquello que n  
 del gobierno,  
 que Rufus B  
 constituyente  
 rando, que "  
*seguridad de*  
*la soberanía*

Que de las  
 recurso de a  
 régimen mex  
 la esfera adn  
 cionan intim  
 cripciones de  
 que el recur  
 una de las g  
 se funda tan  
 de alcabalas  
 en la violaci  
 que se objet  
 timidad de s  
 de la Consti  
 ceptos mas  
 tablecidos e  
 y entonces  
*conocimient*  
*efectivos los*  
*de los Esto*  
*que es la S*

Que es indudable, que así como esa ley suprema, "contiene cláusulas que protegen á los gobiernos de los Estados contra las violencias de los gobernados, del mismo modo establece preceptos dirigidos á proteger á los gobernados contra la ambicion ó usurpacion de los gobernadores." (Opúsculo del Sr. Lic. Velasco):

Que entre los medios para llenar este último fin, existe uno que tiene un doble aspecto, el político y el judicial, "empleándose el primero siempre que los encargados del poder público subvierten la Constitucion del Estado por medios revolucionarios, en cuyo caso la accion federal se hace sentir en otra esfera, y poniendo en práctica el segundo, cuando se levanta una usurpacion con apariencias de legalidad," (el mismo Opúsculo):

Que en ese evento, los tribunales de la federacion deben resolver toda controversia por leyes ó actos que vulneren las garantías individuales, y "se violan éstas, cuando se usurpa el poder en trasgresion de las formas y de los caracteres fijados en la Constitucion federal ó la del Estado, porque entonces se viola la garantía consignada en el art. 16, porque el usurpador no es autoridad competente:"

Que sobre todas esas consideraciones, viene la de que ya no puede revocarse en duda la facultad que el poder judicial federal tiene, para examinar los títulos de legitimidad de las autoridades de los Estados, á efecto de calificar su competencia, tratándose de la aplicacion del art. 16 de la Constitucion general, pues las resoluciones de la Suprema Corte en ese sentido, tomando por regla de su conducta para fijar el derecho público, la misma Constitucion, como lo previene el art. 28 de la ley de 20 de Enero de 1869, han formado ya la jurisprudencia respecto á la jurisdiccion de los tribunales federales con relacion á ese punto:

Que bajo ese aspecto, y concretando el análisis á las cuestiones fijadas en el ocu-

so de queja, hay que considerar en órden á la primera de esas cuestiones, ó sea á la que se refiere á no existir en el Estado ley ó disposicion alguna que determine ó establezca legalmente el pago de contribuciones ó impuestos, que es terminante el texto de la fraccion IX art. 36 de la Constitucion del Estado, expedida el 14 de Setiembre de 1861, que numerando las facultades del Congreso, fija entre ellas la de "*aprobar el presupuesto de gastos que debe presentar el ejecutivo al principio del segundo período de sesiones de cada año, decretando las contribuciones necesarias para cubrirlo,*" precepto que se encuentra reproducido en la Constitucion reformada (fraccion VIII del art. 44):

Que es un hecho no refutado por el empleado responsable, que á pesar de aquella espresa prevencion constitucional, no se ha expedido, ni se conoce en el Estado la ley de presupuesto de ingresos que obligue á los habitantes de aquel á contribuir para los gastos de la administracion; y al no existir esa ley, y al exigirse sin ella contribuciones ó impuestos por el empleado de hacienda, se viola la garantía consignada en el art. 16 de la Constitucion general, pues la providencia en cuya virtud se exige el pago, carece de uno de los requisitos indispensables de legalidad, como lo es el "*mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento,*" que en el caso no es otro que la ley:

Que no son de estimarse como legales los razonamientos que en su informe respectivo emplea el ciudadano Tesorero, con el fin de cohonestar de algun modo la falta de cumplimiento al precepto constitucional y de reputar subsistente, á pesar de esto, la obligacion de contribuir, y cuyos razonamientos se contraen, á que el hecho de no existir el presupuesto de ingresos, no importa la derogacion de las leyes relativas á contribuciones ó impuestos, y á que no se puede inferir lógicamente del texto del precepto constitucional, que forzosamente deba ex-

pedirse anualmente el presupuesto de ingresos:

Que respecto del primer razonamiento, es inconcuso que las leyes fiscales deben tener, en el sistema que nos rige, un tiempo determinado, y que por lo mismo, no pueden subsistir mas allá del período para el que se expiden, sino es mediando declaración legal que prorogue su vigor, porque no siendo uniformes las necesidades de la administración pública, y estando por otra parte, sujetos los impuestos á las variaciones de las circunstancias, aquellas leyes no pueden asumir un carácter permanente ó indefinido, pues de otro modo se incidiría en el mismo vicio de que adolece el sistema hacendario de los gobiernos despóticos, sistema que rechaza la prescripción constitucional, y por eso, si el poder legislativo, infringiendo esa prescripción, omite decretar las contribuciones ó impuestos que deben cubrir los gastos, y si para satisfacerlos, se dan leyes que establezcan ciertas contribuciones, esas leyes, supliendo, por decirlo así, el presupuesto de ingresos, no pueden ante el artículo constitucional, tener mas duración que la del año económico, fenecido el cual, esas mismas leyes, si no se reputan derogadas, si está en suspenso su observancia, hasta que, en tiempo y forma, se les dé nuevo vigor, sin que esté al arbitrio de la autoridad presupuestar los ingresos en cualquiera tiempo, pues la Constitución fija la época y las condiciones con que el pueblo debe contribuir para el sostenimiento de la administración:

Que por lo que hace al segundo razonamiento, el tenor bien expreso del artículo constitucional no se presta á interpretación de ningún género, sobre la necesidad inclinable, sobre la obligación que hay de formar *anualmente* el presupuesto de ingresos; pues el espíritu de ese precepto se percibe claramente, con solo fijarse en el gran objeto que envuelve, que no es otro que el de nivelar periódicamente los ingresos con los

gastos, pues si éstos disminuyen en importancia, en la misma proporción deben reducirse aquellos, para que los impuestos no sean gravosos por excesivos, principio económico que se ve consignado en la Constitución local (art. 92) que previene, que "*las contribuciones solo se decretarán en la cantidad necesaria para cubrir los gastos públicos, así ordinarios como extraordinarios,*" y que está en consonancia con lo que ordena el art. 31 de la Carta fundamental del país, que al hablar de las obligaciones de todo mexicano, señala (fracción II,) la de *contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Estado y municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes:*"

Que las prescripciones de esos artículos constitucionales no pueden llenarse debidamente, si no es bajo una base cierta y determinada; que ésta no puede encontrarse en la expedición arbitraria y eventual de leyes hacendarias, sino en ese balance anual que el legislador tiene precisión de practicar con presencia de las necesidades de la administración, examinando la condición de las fuentes de la riqueza pública, pues de lo contrario, á mas de que no procedería con *equidad y proporción* en el establecimiento de los impuestos y contribuciones, haciendo así nugatorio el precepto constitucional que previene que se decreten hasta la cantidad concurrente para cubrir los gastos, expondría la administración á un desconcierto si estos son mayores, ó de gravar al pueblo forzándolo á contribuir con mayores é innecesarios impuestos:

Que si bien el ciudadano tiene obligación de "*contribuir para los gastos públicos,*" según lo dispone la fracción VI del art. 16 de la Constitución local, tal obligación debe cumplirse, en expresión del mismo artículo, "*en el modo y forma que dispongan las leyes;*" cuya prescripción funda el concepto, de que para constituir esa obligación, no basta el precepto general de contribuir, sino que es preciso el establecimiento de la ley que fije el modo y forma de hacerlo, y esa ley

no es otra, tratándose del año fiscal, que la de presupuesto de ingresos.

Que por otra parte, y dados estos precedentes, hay precision de examinar, en virtud de qué disposiciones ha procedido el empleado responsable, á fin de calificar la legalidad ó ilegalidad del procedimiento:

Que atento el tenor del informe producido por aquel empleado, esas leyes no han podido ser otras, que ó las de épocas antiguas, esto es, las dictadas por los gobiernos centrales, ó las expedidas desde el restablecimiento del orden constitucional en 1867, hasta 1871, en que cesaron los poderes establecidos conforme á la Constitucion del Estado, ó las emanadas directamente de la Asamblea y del Ejecutivo, facultado por aquella, es decir, de las autoridades creadas á virtud de las reformas publicadas en Diciembre de 1870.

Que respecto de las leyes expedidas en las épocas antigua y constitucional, es indudable que ninguna de ellas ha podido servir de apoyo legal al procedimiento, porque siendo inconcuso que las leyes fiscales, aun de procedencia legítima, deben tener, segun se ha demostrado, un periodo fijo de duracion; siendo cierto ademas, que no se conoce en el Estado el presupuesto de ingresos en que figuraran aquellas leyes, y siéndolo así mismo, que tampoco hay disposicion especial que haya dádoles nuevo vigor para el presente año económico, es patente que la providencia es de todo punto ilegal:

Que con relación á las leyes publicadas desde 1871, ó sea las que reconocen por origen los poderes actuales, la providencia de la oficina de hacienda es todavia mas atentatoria; porque descansa en una base ilegal, en razon de que esas leyes, inclusa la de presupuesto de gastos, publicada el 28 de Diciembre de 1873 (fs. 84 del cuaderno de pruebas del actor,) proceden de autoridades incompetentes, porque son ilegítimas, una vez que deben su existencia á las reformas introducidas á la Constitucion local, y entonces la violacion del art. 16 de la general;

es manifiesta, porque la providencia que ha dado materia al recurso, carece del requisito del mandamiento escrito de *autoridad competente*:

Que contra la exactitud de esos asertos, no tiene significacion alguna legal, la existencia *de hecho* de la Asamblea y del Ejecutivo, ni son tampoco de aceptarse los conceptos vertidos por el empleado responsable, en cuanto á que la legitimidad de los poderes del Estado, estriba en las reformas y adiciones hechas á la Constitucion de 1861, publicadas el 12 de Diciembre de 1870, porque esas reformas y esas adiciones son esencialmente viciosas, intrínsecamente nulas, porque se introdujeron con violacion flagrante de los indispensables requisitos marcados detalladamente en el art. 118 de la Constitucion expresada, sin que para desvirtuar la fuerza de esa verdad, sea bastante la alegacion del referido empleado, respecto á que esas reformas se consumaron bajo las reglas prescritas en la ley de 31 de Octubre de 1870 (fs. 22 del mismo cuaderno) porque esa ley es precisamente la que entraña el germen fecundo que ha producido el conjunto de ilegalidades que envuelve el decreto núm. 125, pues la transformacion que sufrió el art. 118, y que aparece en el decreto referido núm. 104 de 31 de Octubre, se practicó hollando abiertamente las formalidades que la Constitucion local estableció en el título XVIII para su legal reforma, y sin observarse las prevenciones de la ley reglamentaria de 13 de Marzo de 1868, (fs. 23 del mismo cuaderno):

Que la infraccion de tan indispensables requisitos, se patentiza, comparando el tenor del mismo art. 118 con los hechos irregulares que lo falsearan: que para formar ese juicio comparativo, se hace preciso el texto de ese art. segun el cual, *para que las adiciones ó reformas se tengan como parte de esta Constitucion, se necesitan los requisitos siguientes*:

*"I. Iniciativa suscrita ó por tres diputados, ó por el gobernador con dos secretarios*



por lo menos, ó finalmente por el Tribunal Superior en acuerdo pleno.

II. Admision de la iniciativa por el Congreso.

III. Publicacion del expediente por la prensa.

IV. Dictámen de una comision especial, al que se dará primera y segunda lectura, con intervalo de quince dias por lo menos.

V. Aprobacion por la mayoría absoluta de los diputados presentes.

VI. Que la adicion ó reforma se apruebe por la mayoría de los Ayuntamientos de las cabeceras de Distritos.

VII. Disposicion del nuevo dictámen, que con vista del voto de los Ayuntamientos formulará una comision especial que se nombrará al efecto. Esta comision presentará á los quince dias, su opinion en sentido afirmativo ó negativo, segun el número de votos de dichas corporaciones."

VIII. Declaracion del Congreso en vista del dictámen de la comision especial.

Que la inobservancia, la contravencion á los mas importantes de esos requisitos, se comprueban plenamente, con el tenor de las actas de las sesiones del tercer Congreso del Estado, con las actas de los Ayuntamientos y demas constancias relativas, las cuales denuncian desde luego, la infraccion, por parte del mismo Congreso, del primero de los requisitos enunciados en el art. que se trataba de reformar, porque previniendo éste que la iniciativa se suscribe por tres diputados, la referente á la reforma de ese art. quedó suscrita solo por dos, pues si bien es cierto que primitivamente fué presentada por los Diputados Flores, Isunza y Lamadrid, no lo es menos que el primero, el 26 de Setiembre de 1870 (págs. 91 y 94 del tercer tomo de actas), es decir, antes que la comision formara su dictámen sobre las reformas, no solo se separó de la comision, no solo formó voto particular contra ellas, sino que hizo retirar su firma de la iniciativa (pág. 105 del mismo tomo), en cuyo caso ya no se debió dar curso á esta, sin que, cuando menos, se

hubiese subsanado en oportunidad ese defecto, que hoy se hace mas remarcable, ante la circunstancia de que en la copia del expediente remitido por la Asamblea, aparece cubriendo esa iniciativa la firma del C. E. Mendizabal, cuando ni en la que se publicó en el órgano oficial, ni en ninguna de las comunicaciones del gobierno, ni en las actas de los Ayuntamientos, ni en las del mismo Congreso, figura el nombre de aquel diputado como uno de los iniciadores de la reforma, y por el contrario, formando ese ciudadano parte de la comision dictaminadora, en el dictámen constante en la pág. 94 del tom. tercero de actas, se encuentran estas frases: "los ciudadanos diputados que suscriben la iniciativa referida, tuvieron por objeto &c." frases que prueban evidentemente que el C. Mendizabal no fué uno de los autores de esa iniciativa, y el aparecimiento de su firma en estos momentos, justifica que con ella se ha pretendido cubrir, aunque extemporáneamente, esa falta:

Que sobre esa infraccion se cometió otra, como lo fué haberse omitido la publicacion del expediente por la prensa, (frac. III.), pues la insercion del texto de la iniciativa en el número 34 de "*El Libre Pensador*," sin las firmas de sus autores, y sin las demas constancias relativas, no puede reputarse como la legal publicacion en el sentido de la ley:

Que por lo que hace al VI de los requisitos de que se viene haciendo mérito, las infracciones fueron todavia mas graves, mas trascendentales, no solo porque se menospreció una de las mas importantes formalidades prescritas para la reforma, sino porque tanto el Congreso como los Ayuntamientos, barrenaron la ley, puesto que, el primero, no hizo cumplir las prevenciones marcadas en la de 13 de Marzo de 1868, que espresamente reglamentó la frac. VI del art. 118, (fs. 23 cuaderno de pruebas del actor), en el hecho de no disponer que, en copia certificada, se remitieran la iniciativa y el dictámen á los Ayuntamientos de los Distri-

tos todos del Estado, ni se fijó á éstos el plazo dentro del cual debían emitir sus votos; y en cuanto á esos mismos Ayuntamientos, las actas respectivas (copia remitida por la Asamblea) acusan la infracción de los arts. 3º, 4º y 5º de la espresada ley reglamentaria:

Que tan se infringió por el Congreso esa ley, en sus arts. 1º y 2º, que la acta de sesiones de 26 de Octubre de 1870 (págs. de la 94 á la 106), pone de manifiesto, que al aprobarse el dictámen, en vez de acordar su remision en copia certificada con la iniciativa á los Ayuntamientos, para que con presencia de todo emitieran sus votos, acto continuo se hizo pasar el expediente á una comision para que computara los votos que aquellos habian emitido de una manera extemporánea é irregular:

Que el hecho consumado por el Congreso el 26 de Octubre, trajo consigo otra infracción, como lo es la de haberse presentado el dictámen relativo á la computacion de votos, antes del tiempo fijado en la frac. VII del art. 118, precipitándose de ese modo el procedimiento en materia tan delicada, puesto que ese dictámen se presentó el 29 del mismo Octubre, es decir, tres dias despues de aceptado el primero, cuando aquel no debió venir sino á los *quince dias* contados desde que fuese nombrada la comision, la que ademas, consumó otra ilegalidad mayor; porque en su dictámen hizo el cómputo de los votos, cuando ese cómputo no podia ni debia practicarlo, en razon de que no habiéndose remitido á los ayuntamientos las copias certificadas de la iniciativa y del dictámen que la acogió, no podian emitirlos legalmente antes del 29 de Octubre:

Que ese concepto no puede destruirse con el hecho de que desde fines de Agosto y principios de Setiembre, algunos ayuntamientos remitieron sus actas, pues los votos emitidos en éstas, no podian dar base á la computacion, por cuanto que, siendo extemporáneos, eran nulos, y así fueron

calificados por algunos miembros del Congreso, desde el 17 de Setiembre en la sesion de ese dia (páginas 10 á la 13 del tomo 3º) al descubrir el fraude que desde entonces se consumaba, con el fin de utilizar las actas anticipadas y nulas de los ayuntamientos:

Que la nulidad de los votos de esos Ayuntamientos, que los emitieran en favor de las reformas, se comprueba, primero: con el hecho de que anticipados tales votos, esto es, emitidos mucho antes del 26 de Octubre (pues las actas tienen fechas de Agosto y principios de Setiembre) en que se aprobó por el Congreso el dictámen de la comision primera, es evidente que los ayuntamientos, procediendo sin conocimiento de ese dictámen ni de la iniciativa, infringieron, lo mismo que el Congreso, los arts. 1º y 2º de la ley de 13 de Marzo; segundo: con el hecho de que esos mismos ayuntamientos votaron por excitativa del gobierno, segun la circular que éste dirigió á las jefaturas políticas en 24 de Agosto, y con vista únicamente del núm. 34 del periódico "*El Libre Pensador*," como lo espresan las mismas actas; tercero: con el hecho de que los referidos ayuntamientos quebrantaron las prescripciones de la ley de 13 de Marzo de 868; que reglamentó la manera con que esas corporaciones debian de emitir sus votos, y las actas remitidas en copia á este juzgado por la Asamblea, ofrecen el cúmulo de irregularidades, de infracciones cometidas por los ayuntamientos al emitir de órden suprema, los votos nulos que estimó como buenos para su cómputo la comision, y entonces estos votos nunca pudieron servir para transformar el artículo constitucional, en que cabalmente se fijan las reglas para la reforma ó adición de la Constitución del Estado:

Que el atropellamiento á los preceptos constitucionales, por los diputados y ayuntamientos reformadores, es decir, por los mismos representantes del pueblo, que mas debieran dar ejemplo de respeto á la ley,



reagrava las infracciones, y hace mas palpable la nulidad de su actos, pues como enseñan Blackston y Kent, *"una Constitucion como ley fundamental del Estado, debe ser estrictamente observada, no solo por los ciudadanos, sino tambien por los poderes públicos, y todo acto, todo juicio que la contraria, ó en manera alguna la infrinja, tiene que ser forzosamente nulo."*

Que la historia de las reformas al art. 118, consignada en datos y piezas oficiales, está demostrando, que, no el pueblo, sino los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, confeccionaron en 1870. esas reformas, pasando por sobre las formalidades constitucionales, lo cual fué contrario á los principios democráticos, porque, como asienta Grimke (libro 2º, cap. 1º, pág. 177 de su derecho constit.) *"Puede una Constitucion, sin embargo, proveer la manera de cómo pueden hacerse alteraciones en ella, para obviar de esa suerte la dificultad proveniente de que una generacion pretenda ligar á las venideras, y asegurar al mismo tiempo á la generacion futura, de que las alteraciones se harán por el pueblo mismo y no por los gobernantes,"* principios sostenidos por Hamilton, en el Federalista (pág. 346,) y por Dalloz en su repertorio de legislacion, tomo 30, pág. 205:

Que por otra parte, la inusitada aceleracion con que se operaron los trabajos de reforma, simplificando los trámites hasta el grado de suprimir algunos de suma importancia, ponen de manifiesto el móvil que presidió á la trasformacion violenta y festinada del art. 118, trasformacion practicada en algunos dias del mes de Octubre de 1870 en que se publicó el decreto núm. 104, contrariándose así, no solo el propósito de los constituyentes, sino los principios generales en materia de legislacion, pues las reformas y alteraciones de una Constitucion, no deben hacerse por los medios comunes y ordinarios con que se forman las leyes secundarias, *"para evitar,*

TOMO VII — PARTE II.

*"como dice Hamilton (lugar citado,) la extrema facilidad que haria demasiado mudable la Constitucion, y para poner ésta á cubierto de las pasiones ó circunstancias del momento, á que pudiesen obedecer los que periódicamente desempeñan el poder legislativo:"*

Que la observancia estricta de los requisitos para las reformas, es tan indispensable para la validez del acto, que su objeto, en sentir del mismo Grimke (pág. 179) es asegurarse de que las alteraciones se harán de una manera tan solemne y deliberada, que no pueda haber duda de que han emanado del pueblo," y porque además, *"la solemnidad de las leyes se aumenta con las restricciones puestas al poder de hacerlas, pues requieren una atencion mas exacta é indivisa á los deberes que se imponen al legislador,"* (el mismo autor, pág. 257, Dalloz t. 30 fs. 527, el Sr. Castillo Velasco, dic. const. pág. 25):

Que la observancia estricta de los requisitos marcados en el art. 118, para que la reforma ó adiccion sea legal, es tan indispensable, cuanto que en ella se fundan la validez y subsistencia de la misma reforma, lo que es todavía mas exacto, cuanto que, segun la doctrina de Merlin (Repertorio de Jurisprudencia tom. 6º, pág. 371,) al clasificar las formalidades, define las intrínsecas diciendo: *"son las que forman el acto en sí mismo, y sin las cuales no puede subsistir;"* sin que puedan saltarse esas formalidades, puesto que *"las fórmulas son una salvaguardia, y el abreviarlas, es disminuir ó destruir esa misma salvaguardia,"* máxima de Benjamin Constant, que lo mismo debe observarse en los juicios, que en la formacion de las leyes, especialmente si se trata de las constitucionales, y por eso el mismo publicista asienta: (pág. 312, tom. 2º de su polít. constituc.) *"En resumen, ¿qué es lo que queda despues de haber violado la Constitucion? La seguridad y la confianza quedan destruidas, los que gobiernan tienen el sentimiento de la usurpa-*

«cion y los gobernados la convicción de que «están á discrecion de un poder que ha tras-  
«pasado la primera de las leyes,» y por eso  
«tambien, Laboulaye ha dicho: «El manda-  
«tario debe tener siempre un mandato de-  
«terminado, y confiar á un poder cualquie-  
«ra las libertades que deben pertenecer al  
«país, es arriesgar siempre el que una asam-  
«blea atente contra ellas:»

Que partiendo de estos principios, y sien-  
do incuestionable que al pretender reformar  
el art. 118 de la Constitucion de 1861, se  
infrinjieron los requisitos que tanto ese  
mismo artículo como su ley reglamentaria  
de 13 de Marzo de 1868, establecieron pa-  
ra que las reformas puedan formar parte de  
la misma Constitucion, es indudable que el  
expresado artículo 118 no debe reputarse  
reformado, tal como apareció en el decreto  
núm. 104 de 31 de Octubre de 1870, (fs.  
22 del cuaderno de pruebas del actor,) y  
por consiguiente, ha quedado en los mismos  
primitivos términos, con que figura en el  
título XVIII de la Constitucion de 1861:

Que sentado este precedente indeclina-  
ble, hay que inferir, que las reformas con-  
tenidas en el decreto núm. 125, que se pu-  
blicó en forma de Constitucion el 12 de Di-  
ciembre de 1870, como practicadas, no con-  
forme á los requisitos establecidos en el art.  
118, ni á los marcados en su ley reglamen-  
taria de 13 de Marzo de 1868, sino bajo  
los auspicios del decreto de 31 de Octubre  
de 1870, son igualmente inconstitucionales  
y nulas, en cuyo caso las autoridades ema-  
nadas de esas reformas, como lo son la  
Asamblea actual, el Ejecutivo, etc. son ile-  
gítimas:

Que esa ilegitimidad deriva su origen, no  
solo de aquella circunstancia, que por sí so-  
la bastaria para fundar la incompetencia  
que se objeta á los poderes del Estado, sino  
de otras que tienen igual fuerza, porque su-  
poniendo bien y legalmente reformado el  
art. 118 de la Constitucion de 1861, y que  
por lo mismo, subsistiria el decreto núm.  
104 de 31 de Octubre de 1870, aún así, la

existencia de esos poderes seria ilegal, en  
razon de que al practicarse las nuevas adi-  
ciones, se incidió en vicios, «infracciones»  
por parte de la Cámara reformadora:

Que la prueba de ese aserto existe inequí-  
voca en los atestados que se han exhibido, por  
los que aparece, que la iniciativa ó proyecto de  
reformas, fué presentado al Congreso el 19  
de Noviembre de 1870 (págs. 167 del tom.  
39 de actas) y que ese mismo día fué admi-  
tido por el mismo Congreso, con infraccion  
de los artículos relativos del reglamento par-  
lamentario de 8 de Junio de 1868:

Que la precipitacion con que se procedió  
para introducir á la Constitucion ese con-  
junto numeroso de reformas á cual mas grave,  
en un periodo de veinticuatro dias, pues  
esos transcurrieron desde el 19 de Noviembre  
al 12 de Diciembre de 1870, en que se pu-  
blicó el decreto núm. 125, demuestra el  
cúmulo de infracciones que se consumaron,  
consistiendo éstas: en la festinacion con que  
los Ayuntamientos, impulsados por la cir-  
cular del gobierno de 23 de Noviembre,  
procedieron á anticipar sus opiniones; en la  
hijereza con que la Cámara nombró la comi-  
sion que debia abrir dictámen sobre la ini-  
ciativa, cuándo aún no podian conocerse, ni  
aún emitirse esas opiniones; en la inoportu-  
nidad con que la misma comision abrió su  
dictámen; en la falsedad con que ésta obró  
en orden al cómputo de aquellas opiniones;  
en el engaño manifiesto que cometió, no solo  
con respecto á los Ayuntamientos, sino al  
Estado, pues la comision dictaminadora, co-  
mo ella misma lo confiesa, [fs. 91 de la có-  
pia relativa remitida por la Asamblea] in-  
trodujo al proyecto otras innovaciones, otras  
alteraciones, otras supresiones, sin que esta  
nueva trasformacion se hubiera sometido,  
ni al exámen de los mismos Ayuntamientos,  
ni á la consideracion pública:

Que la primera de esas infracciones se  
prueba con el hecho de que concluida la  
impresion del proyecto en la "*Publicacion  
Oficial*," correspondiente á los dias 24, 26  
y 29 de Noviembre, (fs. de la 1 á la 6 del

cuaderno de pruebas del actor) y suponiendo remitidos los ejemplares el 30 del mismo mes á los Distritos, era imposible que llegasen á su destino, que se discutiese el proyecto que contenian, y que se remitiesen al Congreso todas las actas en un término menor de doce días, supuesto que los Ayuntamientos debian emitir su opinion dentro de ocho (fuec. 3ª del decreto de 31 de Octubre) y esperar cuatio cuando menos, para la iniciativa y remitir las actas, y no obstante esto, levantaron esas actas en 27, 28 y 30 del mismo mes de Noviembre, cuando apenas se concluia la publicacion oficial del proyecto:

Que la ligereza de la Cámara, al nombrar la comision que debia dictaminar con vista de la opinion de los Ayuntamientos, no puede negarse ante la circunstancia de que habiéndose hecho el nombramiento el 24 del mismo Noviembre (pág. 178, tercer tom. de actas), y no debiendo la comision dictaminar sino á los ocho días de nombrada, es decir, el 2 de Diciembre, ó si se quiere el día 5 como lo hizo, es fuera de duda que su dictámen no podia basarse sobre aquellas opiniones, que no le era dado conocer en esa fecha, al menos en su mayor parte, en razón de que varios Ayuntamientos levantaron sus actas en los primeros días de Diciembre, como lo fueron los de Huejotzingo, Cholula, Zacapoaxtla, Tlatlauqui, en cuyo caso no pudo formar un concepto exacto y acertado acerca del sentir de los municipios, lo que por otra parte prueba tambien, que anticipó su juicio, y que procedió con gran impaciencia al formular su dictámen:

Que la doble falsedad con que se produjo la comision, se patentiza con el tenor de su mismo dictámen, pues presentado éste, como se ha dicho el 5 de Diciembre [pág. 203 del tercer tom. de actas] se afirmó (pág. 91 vta. de la copia remitida por la Asamblea) que ese dictámen se estendia *“con vista de la opinion manifestada por los Ayuntamientos”* cuando en esa fecha ni Chalchicomula, ni Tepeaca, ni Zacatlán remitian sus actas, pues el

primero de esos Distritos, no solo no lo hizo, sino que únicamente existe un oficio del jefe político fechado el 7 de ese mes (pág. 71 vta. de la copia respectiva); el segundo apenas el día 6 estendia su dictámen la comision del Ayuntamiento (fs. 72 vta.), y el tercero mandó su acta hasta el 20 de Enero de 1871 (fs. 87); fuera de que tampoco se tuvieron á la vista, porque no las remitieron, las actas de Puebla, Acatlán y Tetela, reagravándose la falsedad al hacerse el cómputo, pues la comision asegura, [fs. 91 de la misma copia], que de los Ayuntamientos de las Cabeceras de Distrito, diez, que lo fueron, Atlixco, Chiautla, Cholula, Huejotzingo, Huauachinango, Tezuitlan, Tlatlauqui, Tepeaca, Tecali y Chalchicomula, opinaron en favor de las reformas, lo que es absolutamente falso, pues ni este último distrito, ni el de Tepeaca las aprobaron:

Que respecto de Chalchicomula, la falsedad está denunciada por las constancias relativas, pues aparte de que un simple oficio forjado por el jefe político, [fs. 71 de la copia], en que tambien se asentaba la falsedad, nunca podia reputarse como una acta probatoria, y tan no, que el gobierno, en su comunicacion al Congreso fecha 9 de Diciembre, manifiesta que no se habia recibido la acta relativa, misma que ya reclamaba; hay ademas la circunstancia, muy atendible por cierto, de que, como lo justifica el certificado del secretario del Ayuntamiento, (fs. 143 del cuaderno de pruebas del actor) aunque en sesion del día 3 del mismo mes de Diciembre se presentó un dictámen, esto no solo impugnaba las reformas, sino que ni aún llegó á discutirse, no emitiendo por lo tanto ninguna opinion el Ayuntamiento, el que por el contrario, poco despues protestó contra las mismas reformas:

Que en cuanto al Distrito de Tepeaca, si bien el día 6 una comision formuló un dictámen, con restricciones que contrariaban en mucha parte, el proyecto de reformas, tal dictámen, tampoco se discutió ni aprobó por el ayuntamiento, como se vé á fs. 72 de

la copia remitida por la asamblea, en la que solo aparece simplemente ese dictámen:

Que bajo este aspecto, y ante las constancias mismas que contiene la copia del expediente autorizada por la asamblea, resulta, que de los veintinueve distritos, cuya opinion se dice consultada, *siete*, que lo fueron: Atlaxco, Cholula, Chiantla, Huejotzingo, Huachinango, Tecali y Tezuitlan, opinaron en favor de las reformas; las reprobaron Tepeji y Tlaxiaco, se abstuvieron de votar y así lo manifestaron, Tecamachalco y Tehuacan; no emitieron opinion fija, es decir: se ignora como votaron, Matamoros, Zaca, Poaxtla y Tepicaca; no votaron, pues ni remitieron actas, Puebla, Acatlán, Pahuatlan, Chalchicomela y Tetela; viniendo por fin ya que estaban publicadas las reformas, las actas de Tlatlauqui y Zacatlan, que no debieron computarse por esa circunstancia; y entonces, sobre la falsedad en que incurrió la comision, se descubre que ésta no tuvo base legal en su dictámen para haberlo emitido en sentido favorable á las reformas:

Que la misma comision, secundando el proceder incómodo de los autores del proyecto de reformas, no solo se hizo cómplice del engaño que ese mismo proyecto envolvía, sino que, por sí, introdujo á éste otras transformaciones y consumó otras supresiones, pues en cuanto á la primera, encubriéndose la parte expositiva del proyecto de reformas *únicamente á seis puntos*, ó sea á la division del poder legislativo en dos cámaras; al aumento de diputados; á la reduccion de las secretarías de gobierno; á fijar los requisitos para encausar á los altos funcionarios del Estado, y, por fin, al nombramiento de jefes políticos, los autores del proyecto, y la misma comision, la hicieron extensiva á gran número de puntos, y lo que es mas, esa comision, excediéndose de sus facultades, todavía hizo otras alteraciones, como lo manifiesta en el mismo dictámen, que ha venido inserto en la copia trabajada por la Asamblea, llamando la atencion, que una pieza de tanta importancia

no se haya conocido antes, y que no hubiera aparecido ni en el órgano oficial del gobierno, ni, sobre todo, entre las actas de las sesiones del Congreso del año de 1870:

Que á ese conjunto de ilegalidades, y como si ellas no hubieran sido bastantes para invalidar por sí las mismas reformas de 12 de Diciembre, se consumaron todavía otras de mas gravedad y trascendencia, porque al publicarse en esa fecha el decreto núm. 125, aparecieron en él nuevas y mas flagrantes infracciones, una vez que ese decreto contenia adulteraciones notables sobre puntos que no se habian tocado en todo el proyecto, como lo fué el relativo al tit. XVIII, pues no habiéndose hecho ni en la iniciativa, ni en el dictámen, ninguna referencia al art. 118, tal cual habia quedado transformado en el decreto de 31 de Octubre, apareció cuarenta y dos dias despues con una nueva adulteracion, bajo el art. 41 (fs. 79 del cuad. de pruebas,) una vez que se despojó á los ayuntamientos de la facultad de *opinar* en materia de reformas, matándose de ese modo la única intervencion que les habia dejado el referido decreto de 31 de Octubre:

Que si, como lo demuestran los razonamientos anteriores, las reformas de 12 de Diciembre de 1870, son altamente ilegales, nulas é insubsistentes, así por no haberse conformado á las prescripciones del art. 118 de la Constitución, como porque indebidamente se consumaron adulteraciones y supresiones, en cuyo caso los poderes emanados de esas reformas son ilegítimos, tal ilegitimidad es todavía mayor relativamente del actual gobernador, porque no habiéndose propuesto en el proyecto, comprensivo de seis únicos puntos, la reforma del art. 56 de la Constitución de 1861, que prohibia la reeleccion, y *suprimida* la prohibicion de una manera atentatoria, en el decreto núm. 125, como lo confiesa el empleado responsable, la ilegitimidad de la autoridad que de hecho ejerce el C. Ignacio Romero Vargas, es todavía mas remarcable; y como de esa autoridad ilegítima procede el

nombramiento del ciudadano tesorero, nombramiento que por otra parte, no se ajustó al ser expedido, á la prevencion del art. 93 de la Constitucion expresa, es patente que tambien son ilegítimas las funciones que ejerce el C. Manuel Azpíroz:

Que atentas las consideraciones que preceden, es inconcuso que se falsó la Constitucion de 1861, formándose por decreto así, otra nueva el 12 de Diciembre de 1870, levantada sobre las ilegales reformas contenidas en los decretos núms. 104 y 125; que ese falsamiento, por la naturaleza misma de la contravencion á terminantes principios constitucionales, por el carácter de las adulteraciones y supresiones, como la que mira al precepto de la no reeleccion, y atento el tenor de las protestas de los ayuntamientos, envuelve vicios que afectan vivamente la esencia del sistema de gobierno representativo popular, hiriéndose de ese modo los arts. 41 y 109 de la Constitucion general, lo que necesariamente produce en el caso presente, la conculcacion del art. 16 de la misma Constitucion, supuesta la ilegitimidad de los poderes del Estado, y su consiguiente incompetencia, todo lo que funda incuestionablemente el recurso de amparo interpuesto:

Que si esto es exacto en cuanto á los puntos relativos á la falta de leyes que establezcan legalmente en el Estado contribuciones é impuestos, y á la ilegitimidad de las autoridades, no lo es en orden á la no concurrencia de los ayuntamientos, á la formacion y recaudacion de los impuestos, pues si bien es cierto que el concurso de los cuerpos municipales á determinados actos en la esfera hacendaria, es un precepto constitucional, sin embargo, como ese punto solo mira al régimen meramente interior del Estado, ni es materia de amparo, ni del resorte de la autoridad judicial federal su examen y decision:

Que por último, y fijando la consideracion en el punto sobre alcabalas, aunque es terminante el art. 124 de la Constitucion

general; aunque la legislatura del Estado por decreto de 2 de Agosto de 1870, hizo cesar las alcabalas é impuestos indirectos en el mismo Estado, creando las contribuciones que sustituyeron aquellas, y aunque en 22 de Noviembre mandó suspender los efectos del decreto de Agosto, á pesar de que quedaron vigentes, esas contribuciones, lo que importó ya un ataque directo al art. 124, con todo, como segun se ha demostrado antes, no existe en el Estado, ley ó disposicion que haya prevenido en tiempo oportuno, la vigencia de las leyes relativas á impuestos para el presente año económico, y como tampoco hay competencia legítima en las autoridades para exigir las, es innecesaria cualquier resolucion, sobre la inconstitucionalidad del cobro de la alcabala en el caso presente.

Por todo lo expuesto, y con fundamento de los arts. 16, 41, 109, 101 de la Constitucion general y de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Lic. José de Jesus López, juez 3º suplente de Distrito, definitivamente juzgando, declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Juan F. Arriola, contra la providencia en cuya virtud se le exige el pago de 222 pesos de derechos por introduccion de veinticinco tercios de cacao. Hágase saber, y sacándose las copias respectivas de esta resolucion, para que se publique en el periódico oficial del Estado y en el *Semanario Judicial*, remítanse estos autos á la Suprema Corte para su revision. — *Lic. José de Jesus López.*—Ante mí, *Francisco de P. Fuentes.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Enero 4 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Juan Francisco Arriola, contra el acto del que funciona de Tesorero de aquel Estado, que ejecutivamente le exige el pago de doscientos veintidos pesos de alcabalas,

por la introducción de veintinueve tercios de cacao; fundándose el quejoso, en que con tal procedimiento se le viola la garantía que le concede el art. 16 de la Constitución, por no poder dicho empleado ejercer la jurisdicción administrativa con que ha obrado, pues ha sido nombrado ilegalmente y por quien no tenía facultad para nombrarlo, de lo que resulta que autoridad incompetente lo molesta contraviniendo á lo dispuesto en dicho artículo. También alega, que en su persona se violan los derechos que los art. 31 y 124 de la Constitución fundamental le garantizan para no pagar mas contribuciones que las presupuestadas y jamás con el carácter de alcabalas interviniendo aduanas interiores. Visto el informe que rindió la autoridad responsable, sosteniendo que habiendo sido nombrado conforme á lo prescrito en la Constitución reformada, que es la vigente, su nombramiento es legítimo y hecho por autoridad competente, porque se observaron los requisitos esenciales para su reforma, no siendo cierto que se hubieran omitido como asegura el peticionario, en su recurso de amparo. Vistas las pruebas rendidas por las partes que en estos juicios deben intervenir y que presentaron con el fin de demostrar la verdad de sus asertos; los alegatos que presentaron sosteniendo sus pretensiones como tambien las copias de las protestas que en contra de las reformas á la Constitución elevaron los ayuntamientos, que no se cotejaron por no habérsele prestado á ello ni el gobernador, ni la asamblea legislativa, y desistido la parte que lo solicitó; lo pedido por el promotor fiscal, la sentencia que en virtud de esto pronunció aquel Juzgado, con todo lo demas que se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que si bien la justicia federal no está llamada por nuestra Constitución á fallar que autoridades sean ó no legítimas, si lo está para decidir las controversias que se susciten sobre la competencia de esas autoridades cuando proceden

sin legítima investidura; y, tiene la Justicia federal en este caso que atender y examinar la legitimidad objetada para resolver acerca de la competencia que se desconoce;

Considerando bajo tales conceptos: que habiendo el ciudadano Arriola implorado la protección de los Tribunales federales, alegando la incompetencia con que lo molesta el Tesorero del Estado de Puebla, por la ilegitimidad de su nombramiento, habiéndose examinado este punto y apareciendo cierto lo que expone, resulta que es incompetente en todos los procedimientos que como Tesorero ha llevado á cabo contra la persona del reclamante.

Considerando: que el primero de los deberes de la Suprema Corte de Justicia, es el de cuidar que no sean violados los derechos del hombre que son la base y el objeto de nuestras instituciones; los coloca sobre todo otro miramiento, y que por lo que consta en el presente juicio aparece que han sido vulnerados los que el ciudadano Arriola garantizan los artículos constitucionales que señala, debe hacérsele efectiva esa garantía.

Considerando: que el Juzgado de Distrito en la sentencia que se revisa, otorgó el amparo con entera sujeción á las prescripciones del Código fundamental de la República; pero solo en dos de las garantías reclamadas, desentendiéndose de lo referente al cobro de alcabalas indebidas.

Considerando: que los Tribunales federales están en la imprescindible obligación de fallar acerca de cada uno de los derechos que se dicen violados, sin poder hacer punto omiso de ninguno de los que reclama el quejoso, y que por lo mismo bajo título alguno ha podido el juez de 1ª instancia desentenderse de lo relativo á esa parte de la queja del ciudadano Arriola.

Considerando: que son terminantes las disposiciones de los arts. 31 y 124 de nuestra Constitución general, previniendo el primero, que ninguno pague contribuciones que



no estén legalmente decretadas; y el segundo, que desde el 1º de Junio de 1858 no se cobren alcabalas, por haber quedado abolidas en toda la República desde ese día, sin que autoridad alguna pueda ya establecerlas ni cobrarlas.

Considerando: que si bien la Suprema Corte en algunos casos ha negado el amparo á los que se han acogido á esos artículos, ha sido porque no se estimó cumplida la condicion del art. 124, por haberlo impedido obstáculos insuperables, que hoy han desaparecido con la paz que felizmente disfruta.

Considerando: que en el Estado de Puebla ya se abolieron las alcabalas, expidiendo la ley de contribuciones con que han sido reemplazadas y ha desaparecido allí del todo el poderoso motivo que obliga á prolongarlas en otros lugares, y que así no es ya posible sin el mas profundo desprecio á la Constitucion que es la suprema ley de la República, sostener en Puebla ahora las expresadas alcabalas y contribuciones con que habian sido sustituidas, esta Corte de Justicia encontrando justa y razonada la sentencia del Juzgado de Distrito que revisa, en la parte que ampara al C. Francisco Arrijoja, por incompetencia del tesorero de Puebla, para exigirle el pago de \$ 222 por derecho de alcabala, y por no haberse publicado en aquel Estado la ley de presupuesto de ingresos; y no estimando de la misma manera el fallo en cuanto á la omision referente al art. constitucional 124, decreta, apoyándose en los artículos antes citados y en lo dispuesto en el 101 de la misma Constitucion y ley de 20 de Enero de 1869, que se reforma esta sentencia en los términos siguientes:

Primero: Se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia que el Juez de Distrito de Puebla pronunció el 4 de Noviembre de 1874, amparando á D. Francisco Arrijoja por falta de competencia en el tesorero del Estado para proceder en su contra, y no existir en el Estado el

presupuesto de ingresos que legalmente establezca el pago de contribuciones.

Segundo: Se revoca en la parte que declara innecesaria su resolucion sobre la inconstitucionalidad del cobro de alcabalas, y en este punto la Justicia federal tambien ampara y protege al C. Francisco Arrijoja, por violarse en su persona con dicho cobro, el derecho que le conceden los arts. 31 y 124 de la Constitucion federal.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de Distrito de Puebla, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M<sup>o</sup> Iglesias.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José M<sup>o</sup> Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 26 de 1875.—Luis M<sup>o</sup> Aguilar, secretario.

## AMPARO.

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por Petra Esparza á nombre de su marido Juan Ramirez, contra el acto del C. Gobernador de ese Estado, que le negó á Ramirez el indulto de la pena de muerte á que fué condenado por el jefe político de Tequila.*

### PEDIMENTO FISCAL.

«El Promotor fiscal dice, refiriéndose al juicio de amparo entablado por Juan Ramirez: